



RESEÑA LEGISLATIVA

ISSN 0717-0416

Nº 1337

22 de Junio de 2018

PROYECTO PRO PYME

BOLETÍN 10785-03

RESEÑA LEGISLATIVA es una publicación de
LIBERTAD Y DESARROLLO
DIRECTOR RESPONSABLE: Luis Larraín A.
EDITOR: Pablo Kangiser G.
DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago,
Chile.



RESEÑA LEGISLATIVA

Nº 1337

22 DE JUNIO DE 2018

ÍNDICE

PROYECTO PRO PYME

BOLETÍN 10785-03

OPINIÓN EJECUTIVA	4
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	5
COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL	8
COMENTARIOS DE MÉRITO ESPECÍFICO A LAS INDICACIONES.....	13
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY.....	15
ANEXO	19

PROYECTO PRO PYME

DESCRIPCIÓN BOLETÍN 10785-03

REFERENCIA	Modifica la ley N°20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas ¹
INICIATIVA	Moción de los senadores Sres. Tuma, Allamand, De Urresti, Moreira y Zaldivar
ORIGEN	Senado; pasó a segundo trámite constitucional a la Cámara de Diputados
COMISIONES	De Economía y De Hacienda
INGRESO	5 de julio de 2016
ARTICULADO	Un artículo primero que introduce modificaciones a la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura; un artículo segundo que reemplaza el literal i) del artículo 4° de la ley N° 20.169, que regula la competencia desleal; y un artículo transitorio relativo a la entrada en vigencia de la ley

¹ Ese es el nombre de referencia del proyecto de ley. Sin embargo, actualmente el proyecto aprobado en el Primer Trámite Constitucional en el Senado, introduce modificaciones a la Ley N°19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la cuarta copia de factura, y a la Ley N°20.169, sobre competencia desleal.

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

Las pequeñas y medianas empresas (“PYME”) constituyen un motor de crecimiento, de empleo y de innovación importante para nuestro país. En efecto, conforme al Informe de Resultados de la Cuarta Encuesta Longitudinal de Empresas del Ministerio de Economía de agosto de 2017, a nivel de tamaño, las pymes resultaron ser las de mayor participación porcentual dentro de la distribución de empresas alcanzando un 51,9%, le siguen de cerca las micro con un 44,9%, mientras que las grandes empresas representaron un 3,2%.

Dada la relevancia de este sector para nuestra economía, la iniciativa original en comento buscaba hacerse cargo de la problemática consistente en el importante desfase o dilaciones excesivas en el pago a estos empresarios, cuestión que a nuestro juicio debiera, en efecto, constituir un objeto de preocupación y de corrección en general para no desalentar la actividad económica. Sin embargo, durante la discusión, el diagnóstico se amplió y se buscó regular y normar sobre esta situación en general para todas las empresas.

La situación de retardo constante en los pagos a un proveedor no es aceptable. Las partes deben cumplir y honrar sus compromisos contractuales y pagar en tiempo y forma las deudas vigentes. Recordemos que el contrato es ley para los contratantes.

Ahora bien, dicho lo anterior, y compartiendo de que se trata de una situación que particularmente afecta a las pequeñas y micro empresas, la iniciativa en estudio, en tanto define plazos máximos de pago, en conjunto con el establecimiento de intereses moratorios y sanciones en caso de incumplimiento de los mismos, no plantea la mejor alternativa para solucionar el problema de fondo. En efecto, resulta poco probable que un proveedor, afectado por el pago inoportuno de la respectiva factura, denuncie a su cliente incumplidor, por cuanto pone en riesgo con ello su futura relación comercial, según lo ha demostrado también la experiencia internacional.

Por último, es importante señalar que el Ejecutivo presentó recientemente indicaciones al proyecto, algunas de las cuales introducen determinados perfeccionamientos a la iniciativa que son destacables. A modo ejemplar, respecto de la aprensión consistente en que se viene proponiendo un plazo único de pago, se valora y considera de la mayor importancia la indicación propuesta por el Ejecutivo al proyecto de ley, consistente en que las partes puedan pactar plazos diferentes de pago, con los resguardos necesarios para que en ningún caso pueden aceptarse pactos que contengan determinadas disposiciones que afecten los derechos de los involucrados. Esta indicación viene a hacerse cargo de las diversas realidades del mercado e industrias, así como también a relevar la autonomía de la voluntad de los contratantes y la libertad contractual— con los resguardos del caso—, principios de la mayor importancia en la materia. Asimismo, son acertadas las indicaciones que

establecen mayor transparencia en la información respecto a los pagadores; el establecimiento de la obligatoriedad de emitir guías de despacho electrónica, entre otros avances.

En suma, y sin perjuicio de valorar la voluntad política de avanzar en brindar una solución en la materia, así como de compartir las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo antes comentadas, creemos que debieran crearse los incentivos necesarios para asegurar la eficacia de un pago oportuno. No es aceptable que los pagadores se excedan e incumplan el plazo de pago acordado con sus proveedores, aduciendo razones como la falta de liquidez, entre otras ■■■

■■■ **CONTENIDO DEL** PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley viene a introducir diversas modificaciones a la legislación existente, con el objeto de promover el pronto pago de las deudas contraídas con los proveedores de bienes y servicios.

En concreto, la iniciativa legal establece principalmente lo siguiente:

- **Plazo máximo de pago.** Respecto a la obligación de pago del saldo insoluto contenido en una factura, se establece un plazo máximo que las partes pueden pactar para el pago de dicha obligación, el que no puede exceder de 60 días corridos. Sin perjuicio de ello, el proyecto agrega que, tratándose del pago asociado a la venta de alimentos frescos y perecederos, el plazo no excederá de 30 días contados a partir de la fecha de la entrega de los mismos, estableciendo una excepción al respecto.
- **Intereses moratorios.** Si no se verifica el pago dentro de los plazos establecidos en la ley, se considera que el deudor ha incurrido en mora, y se devenga desde el primer día de la mora o simple retardo y hasta la fecha del pago efectivo, un interés igual al interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de noventa días, por montos superiores a UF 200 e inferiores o iguales al equivalente de UF 5.000.

- **Comisión fija por recuperación de pagos y acción civil de resolución y/o cumplimiento forzado, más indemnización de perjuicios.** Siempre que el comprador esté en mora, debe pagar una comisión fija por recuperación de pagos, cuyo monto se determinará en función del monto total adeudado por el comprador, según una tabla. Asimismo, se le otorga a la empresa afectada por el no pago oportuno de la factura, la posibilidad de demandar la resolución del contrato o el cumplimiento forzado del mismo más la indemnización de los perjuicios que deriven de dicho incumplimiento.
- **Plazo especial respecto de contratos de suministros y prestación de servicios celebrados por organismos públicos.** La iniciativa establece que los pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Sin perjuicio de ello, las referidas entidades podrán establecer un plazo de hasta 60 días corridos en las bases de licitación respectivas y/o en los contratos, según sea el caso, lo que deberá sustentarse en motivos fundados. En el evento que la entidad no cumpla con los plazos pactados en las bases de licitación o contratos, se generarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios, pudiendo, además, el funcionario incumplidor ser sancionado con una multa adicional de hasta un 10% de su remuneración mensual, la que podrá ser duplicada en caso de reincidencia.
- **Acto de Competencia Desleal.** Se considerará como un acto de competencia desleal, la infracción de los plazos dispuestos en la ley para el cumplimiento de la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura.
- **Vigencia de la ley.** La iniciativa establece que la ley entrará en vigencia el primer día del cuarto de mes de publicada en el Diario Oficial, salvo en el caso de los Servicios de Salud, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las municipalidades, a quienes se les aplicarán las normas respectivas el primer día del vigésimo quinto mes de publicada la ley en el Diario Oficial.

INDICACIONES DEL EJECUTIVO

El pasado 5 de junio, el Ejecutivo presentó indicaciones al proyecto, que consisten básicamente en los siguientes:

- Se mantiene el plazo máximo de 60 días de pago sin intereses, pero con las siguientes particularidades:
 1. Se contempla la posibilidad de convenir plazos mayores a 60 días de pago, por medio de un acuerdo escrito y que debe ser suscrito por quienes concurran a él.

2. Se elimina la excepción del plazo de 30 días para el caso de la venta de alimentos frescos y perecederos.

- Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios celebrados por organismos públicos, los pagos a proveedores deben efectuarse dentro de 30 días corridos a la recepción de la factura o instrumento tributario de cobro, salvo excepciones legales. Sin perjuicio de ello, las entidades podrán establecer un plazo de hasta 60 días corridos en las bases de licitación, y en este caso, deberá informarse a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración.
- La Dirección de Compras y Contratación Pública asesorará a los organismos públicos en la gestión de sus procesos de pago para el cumplimiento de los plazos que establece este proyecto.
- Se devengarán intereses corrientes por los días de pago vencidos de la factura.
- El cumplimiento de los pagos será verificado por la unidad de auditoría interna de cada servicio o ministerio, o por aquella que cumpla tales funciones. El Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá informar a la Dirección de Compras y Contratación Pública el número, monto e identificación del emisor de cada una de las facturas y notas de crédito recibidas por los respectivos organismos de salud y municipalidades.
- Se incorporan incentivos a los funcionarios públicos para el cumplimiento de los plazos de pago, generando responsabilidades administrativas de los funcionarios y sanciones en caso de falta de pago oportuno. La Contraloría podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan.
- Los organismos públicos deberán publicar en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, todos los actos relativos a la ejecución de sus contratos.
- Serán inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas.
- Se establece la obligatoriedad en la emisión de guías de despacho electrónicas.
- Se elimina la consideración como acto de competencia desleal el no pago oportuno.
- En cuanto a la vigencia de la ley, tratándose de los Servicios de Salud, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las municipalidades, se les aplicarán las normas respectivas el primer día del trigésimo séptimo mes de publicada la ley en el Diario Oficial, tratándose de empresas de menor tamaño, y luego de 12 meses, se establece su aplicación para todas las facturas emitidas, sin distinción de emisor ■■■

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

1. Antecedentes del Proyecto de Ley

El proyecto de ley objeto de análisis ha sufrido diversas modificaciones desde su ingreso a la fecha.

En efecto, la iniciativa legal promovida por los Honorables Senadores señores Tuma, Allamand, De Urresti, Moreira y Zaldívar, se planteó originalmente como una modificación a la Ley N°20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas.

El objetivo del proyecto era “establecer una mayor simetría en las relaciones de comercio y prestaciones de servicio que efectúan las empresas de menor tamaño particularmente las pequeñas y micro empresas considerando su posición en el mercado, su baja participación en ventas y exportaciones, su aporte en la generación de empleos y las dificultades que presentan para acceder a fuentes de financiamiento formales.”²

Con dicho propósito, el proyecto de ley original contenía un artículo primero, que introducía diversas modificaciones a la Ley N°20.416, y un artículo segundo, relativo a la vigencia de la ley, estableciendo básicamente lo siguiente:

Un plazo máximo de pago de 30 días corridos, contados desde la fecha en que el deudor haya recibido la factura o la solicitud de pago, y en caso

de dudas, desde la fecha de recepción de los productos o prestación de servicios. Sin embargo, tratándose de la venta de productos de alimentación frescos y perecederos, dicho plazo no excederá en ningún caso 30 días, contados desde la fecha de entrega de los mismos.

Si no se verificare el pago dentro de los plazos legales, se entenderá que el deudor ha incurrido en mora, y se aplicarán los intereses respectivos, tomándose como tasa de referencia el interés máximo convencional.

Asimismo, sin perjuicio de los intereses y cualquiera sea la naturaleza del deudor, la empresa de menor tamaño afectada podrá demandar la resolución del contrato o el cumplimiento forzado del mismo, más indemnización de perjuicios.

Sin embargo, iniciada la discusión general y particular del proyecto, y tras escuchar a diversos actores interesados y/o especializados en la materia, el Senado aprobó en enero de 2018 las indicaciones que fueron formuladas al proyecto, despachando a la Cámara revisora una nueva versión compuesta de tres artículos: un artículo primero permanente, que introduce diversas modificaciones a la Ley N°19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la cuarta copia de factura; un artículo segundo, que establece como acto de competencia desleal la infracción a los plazos establecidos en la Ley N°19.983 para el cumplimiento de la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura; y un artículo transitorio, relativo a la vigencia de la ley.

² Proyecto de Ley, Boletín N°10.785-03, Moción, p.1.

Con ello, el proyecto de ley establece reglas iguales para todas las empresas, sin considerar su tamaño, con el objeto de promover el pronto pago de las deudas contraídas con los proveedores de bienes y servicios.

Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en Segundo Trámite Constitucional, en la Cámara de Diputados, para su revisión.

2. Realidad de las PYMES en Chile y de los Plazos Promedio de Pago.

Antes de analizar el mérito o conveniencia de la iniciativa legal, es necesario tener en cuenta ciertas consideraciones.

Según las estadísticas proporcionadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en relación al año tributario 2016, se registraron 1.074.040 empresas con actividad en el país, representando el sector de la micro, pequeña y mediana empresa el 98, 68% de las empresas en Chile, las cuales participan del 14,75% de las ventas. Toda esta información se desprende del siguiente cuadro³:

Ahora bien, y en lo que atañe a la problemática central que pretende solucionar el proyecto de ley, de acuerdo al Ranking de Pagadores que elaboran trimestralmente la Bolsa de Productos (BPC) y la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), el plazo promedio de pagos a las pequeñas y

3 http://www.sii.cl/estadisticas/empresas_tamano_ventas.htm#3

TAMAÑO SEGÚN VENTAS	Año Tributario 2016			
	(Año comercial 2015)			
	N° de Empresas	Monto de Ventas (miles de UF)	N° Trabajadores Dependientes Informados	Remuneraciones de Trabajadores Dependientes (miles de UF)
SIN VENTAS	156.711	0	613.390	201.239,70
MICRO 1	261.164	20.421,40	97.382	22.546,70
MICRO 2	187.537	69.513,50	88.979	13.951,00
MICRO 3	234.503	295.429,70	378.906	43.545,30
PEQUEÑA 1	89.538	311.239,90	426.776	45.699,20
PEQUEÑA 2	58.018	408.102,70	537.965	55.114,60
PEQUEÑA 3	43.951	684.101,30	835.056	99.770,90
MEDIANA 1	17.953	629.325,50	706.990	93.956,60
MEDIANA 2	10.493	733.577,00	746.024	113.025,40
GRANDE 1	6.138	861.149,60	714.147	108.774,90
GRANDE 2	4.870	1.640.219,10	1.065.305	177.868,00
GRANDE 3	1.091	839.479,70	477.563	86.969,60
GRANDE 4	2.073	14.874.062,20	2.219.971	701.342,60
Total general	1.074.040	21.366.621,40	8.908.454	1.763.804,60

medianas empresas (pymes) por parte de sus compradores -en su mayoría grandes empresas- llegó a 51 días en el primer trimestre de este año.⁴

Asimismo, son las municipalidades y los hospitales, en ese mismo orden, los peores pagadores del Estado a sus proveedores, universo conformado en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas. En efecto, según noticia publicada en El Mercurio, al 23 de abril del año en curso, existe en ChileCompra un total de 28.400 reclamos pendientes de los proveedores por solucionar. De ellos, las municipalidades concentran el 78% de las quejas (22.136), seguidas de los hospitales con 16% de los reclamos (4.531). Luego se ubican otras instituciones o servicios, como Gobierno Central, universidades y las Fuerzas Armadas. Las instituciones públicas que tienen la mayor cantidad de reclamos pendientes por no pago a 30 días son la Municipalidad de Lota y la Posta Central.⁵

3. Sobre el establecimiento de un plazo máximo para el pago de la obligación insoluble contenida en la factura e intereses moratorios.

Según se desprende de la moción, el objetivo del proyecto original era promover el pronto pago de las deudas contraídas con pequeñas y medianas empresas cuando efectúan ventas

de un producto o prestación de servicios, de tal modo de establecer una mayor simetría en las relaciones de comercio y prestaciones de servicios que efectúan las empresas de menor tamaño ("EMT"), particularmente las pequeñas y micro empresas. En efecto, la iniciativa original buscaba hacerse cargo del retraso en el pago de las facturas que sufren las EMT. Sin embargo, durante la discusión, el diagnóstico se amplió y se buscó regular y normar sobre esta situación en general para todas las empresas.

La situación de retardo constante en los pagos a un proveedor no es aceptable. Las partes deben cumplir y honrar sus compromisos contractuales y pagar en tiempo y forma las deudas vigentes. Recordemos que el contrato es ley para los contratantes.

Para hacerse cargo de este problema, el proyecto de ley propone el siguiente mecanismo de solución: fijar un plazo máximo de pago, de 60 días, aparejado de intereses moratorios en caso que no se cumpla con el pago en el plazo establecido, y consagra el derecho del afectado a demandar por los perjuicios experimentados.

Pero, ¿constituye la fijación de un plazo máximo y único de pago⁶, más intereses moratorios en caso de retraso, la mejor solución para los afectados?

En primer lugar, fijar un plazo máximo de pago, idéntico, para todos los actores del mercado desconoce las distintas realidades de aquellos y de los tipos de industrias o rubros, las que no operan del mismo modo.

4 <http://noticias.bolsamipyme.cl/plazo-promedio-de-pagos-a-pymes-subed-dias-en-el-primer-trimestre-de-este-ano/>, noticia publicada en El Mercurio, Sección Economía y Negocios, martes 24 de abril de 2018.

5 <http://noticias.bolsamipyme.cl/municipalidades-y-hospitales-son-los-peores-pagadores-del-estado-a-las-pymes/>, noticia publicada en El Mercurio, Sección Economía y Negocios, miércoles 2 de mayo de 2018.

6 Las indicaciones del Ejecutivo permiten abrir un espacio para fijar plazos diferentes, lo que es acertado toda vez que respeta la autonomía de la voluntad de los contratantes con los resguardos necesarios.

Por su parte, y sin perjuicio que el pago de intereses moratorios pudiera generar un efecto disuasivo, resulta poco probable que una pequeña y mediana empresa persiga a su cliente en estos términos en caso de retraso, toda vez que puede existir el temor de dañar su relación comercial con el cliente. Tomando como referencia lo expuesto por don Jorge Hermann Anguita, Director de Hermann Consultores, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, la experiencia europea es el mejor ejemplo de que el establecimiento de un plazo de pago por ley y los intereses moratorios no constituyen una solución efectiva al problema. En ese sentido, don Jorge Hermann indicó que una evaluación regulatoria reflejó que un 86% de las empresas tienen conocimiento de su derecho a reclamar y que el 60% de los encuestados nunca ejercieron sus derechos, en particular las PYMES. Ello, precisamente por el temor de perjudicar la relación comercial, de tal manera que queda en evidencia que dicha iniciativa no ha mejorado el comportamiento de los pagos en otros países.⁷

Ahora bien, respecto de la aprensión consistente en que se viene proponiendo un plazo único de pago, se valora y considera de la mayor importancia la indicación propuesta por el Ejecutivo al proyecto de ley, consistente en que las partes puedan pactar plazos diferentes de pago, con los resguardos necesarios para que en ningún caso pueden aceptarse pactos que contengan determinadas disposiciones que afecten los derechos de los involucrados. Esta indicación viene a hacerse cargo de las diversas realidades del mercado e industrias, así como también a relevar la autonomía de la voluntad de los contratantes y la libertad contractual—

con los resguardos del caso—, principios de la mayor importancia en la materia. Asimismo, son acertadas las indicaciones que establecen mayor transparencia en la información respecto a los pagadores; el establecimiento de la obligatoriedad de emitir guías de despacho electrónica, entre otros avances.

En consecuencia, y sin perjuicio de valorar la voluntad política de avanzar en brindar una solución en la materia, así como de compartir las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo antes comentadas, creemos que debieran crearse los incentivos necesarios para asegurar la eficacia de un pago oportuno. No es aceptable que los pagadores se excedan e incumplan el plazo de pago acordado con sus proveedores, aduciendo razones como la falta de liquidez, entre otras.

En este sentido, existen otras vías más idóneas para asegurar un pago oportuno a las pequeñas y medianas empresas. Algunos economistas y representantes de distintas organizaciones se han pronunciado por la idea de no poder utilizar el IVA crédito mientras la factura no sea pagada, idea que en principio, y sin perjuicio de los estudios de factibilidad que es necesario hacer, compartimos.⁸ En esta línea, no obstante, y dada la iniciativa exclusiva en la materia, debiera ser el Ejecutivo quien proponga una medida como ésta⁹. Por otro lado, otro mecanismo que podría

⁷ Presentación Jorge Hermann, en Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el 8 de mayo de 2018, disponible en <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmlD=131415&prmlTIPO=DOCUMENTOCOMISION>.

⁸ “Que la empresa compradora de bienes y servicios a una pyme no pueda ocupar el IVA crédito de la factura si no le ha pagado a su proveedor”, indica el economista Tomás Flores, coincidiendo así con el líder de Conapyme, en Noticia publicada en El Pulso el 12 de abril de 2018, titulada “Lo que esperan las pymes del proyecto de ley sobre “pago oportuno””.

⁹ El Ejecutivo, al presentar sus indicaciones, no incorporó la prohibición de usar el IVA Crédito de la factura, mientras no se ha pagado al proveedor, por cuanto existirían problemas operacionales asociados a dicha propuesta según lo explicado por el SII. Sin embargo, creemos que esta alternativa debería explorarse, razón por la que nos parece adecuada la indicación propuesta por algunos parlamentarios de exigir un informe técnico al SII sobre la factibilidad técnica de esta proposición.

estudiarse es la creación de una plataforma en que los proveedores puedan informar los pagos recibidos de sus facturas, de tal manera de transparentar la información respecto de quiénes son buenos y malos pagadores, generando información crediticia positiva, en términos de quienes son buenos pagadores.

4. Sobre el plazo máximo para el pago de la obligación insoluble contenida en la factura y sanciones aplicables a los organismos públicos.

Por último, teniendo en consideración que las municipalidades y los hospitales son los peores pagadores a sus proveedores, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas, creemos que para que exista un real avance en el pronto pago de las deudas contraídas por dichos organismos, el establecimiento de un plazo máximo y las sanciones aparejadas al incumplimiento de

éste, tampoco son los mecanismos adecuados para lograr dicho objetivo. Resulta conveniente también generar los incentivos adecuados para estos organismos a fin de que puedan pagar a tiempo, como por ejemplo, publicar los plazos de pago a los proveedores del Estado, de modo de transparentar la información.

En este sentido, con las indicaciones propuestas por el Ejecutivo también se avanza en esta materia, toda vez que se propone que la Dirección de Compras y Contratación Pública asesore a los organismos públicos en la gestión de sus procesos de pago para el cumplimiento de los plazos que establece este proyecto; que el Servicio de Impuestos Internos (SII) informe a la Dirección de Compras y Contratación Pública el número, monto e identificación del emisor de cada una de las facturas y notas de crédito recibidas por los respectivos organismos de salud y municipalidades; y que el cumplimiento de los pagos sea verificado por la unidad de auditoría interna de cada servicio o ministerio, o por aquella que cumpla tales funciones, entre otros incentivos



V. COMENTARIOS DE MÉRITO ESPECÍFICOS A LAS INDICACIONES

INDICACIONES DEL EJECUTIVO	COMENTARIOS
<p>Se fija en 60 días el plazo máximo de pago sin intereses, existiendo la posibilidad de convenir un plazo mayor a 60 días de pago, por medio de un acuerdo escrito y suscrito por quienes concurren a él.</p> <p>Respecto de este acuerdo, la Indicación señala que no producirán efecto alguno en él las cláusulas o estipulaciones que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otorguen a una de las partes dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato. 2. Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad que puedan privar a cualquiera de las partes de su derecho de resarcimiento frente a incumplimientos. 3. Establezcan intereses por no pago, inferiores a los señalados en esta ley. 4. Las demás que establezcan las leyes. 	<p>Establecer un plazo máximo para el pago de la factura, puede ser complejo toda vez que con ello se desconoce la existencia de los distintos comportamientos y realidades de las diversas industrias en el mercado. Asimismo, reiteramos nuestra aprensión de que el referido plazo no contribuya a ser una solución efectiva al problema de fondo, por las razones ya expuestas.</p> <p>Ahora bien, dicho lo anterior, la indicación que propone el Ejecutivo, que deja a salvo el derecho de las partes a establecer un plazo superior al de 60 días, es fundamental mantenerla. Ello, por cuanto se reconoce que en esta materia son las partes las que deben fijar libremente las condiciones de contratación, incluido el plazo para pagar, y la ley debe velar porque se generen los incentivos adecuados para que los pagadores cumplan con los plazos pactados.</p> <p>Por último, y en relación al párrafo de que no producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones que se enuncian, creemos que apuntan en la dirección correcta y son un complemento/ refuerzo a la regulación general en la materia. En relación a la contenida en el N°3, somos partidarios de que se evalúe con mayor profundidad en el estudio del proyecto de ley toda vez que pudiera convertirse en un elemento que trabase negociaciones entre las partes y que bien podrían suplirse con otras penalidades establecidas libremente entre los contratantes.</p>
<p>Se elimina la comisión por recuperación de pagos contemplada en el proyecto.</p>	<p>La indicación es positiva, por cuanto la comisión por recuperación de pago resulta excesiva, y constituye una segunda sanción para el proveedor incumplidor, el cual ya es sancionado a través de intereses moratorios.</p>

INDICACIONES DEL EJECUTIVO	COMENTARIOS
<p>Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por organismos públicos, se mantiene el plazo de pago de 30 días corridos, salvo excepciones legales o de que se establezcan 60 días en las Bases de Licitación, cuando haya motivo fundado, lo que deberá informarse a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración.</p> <p>Se agrega que los organismos públicos deberán publicar en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, todos los actos relativos a la ejecución de sus contratos, y que la Dirección de Compras y Contratación Pública asesorará a los organismos públicos en la gestión de sus procesos de pago e informará a la unidad de auditoría interna de cada servicio o ministerio.</p>	<p>La indicación del Ejecutivo que establece que los organismos públicos deberán publicar en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, todos los actos relativos a la ejecución de sus contratos, parece razonable. Experiencia comparada demuestra que mayor transparencia en la información sobre los plazos de pago, contribuye a reducir los tiempos de pago. Asimismo, el hecho de que el cumplimiento de los pagos sea verificado por la unidad de auditoría interna de cada servicio o ministerio, o por aquella que cumpla tales funciones, también es una incorporación positiva.</p>
<p>Se incorpora la obligatoriedad de la emisión de guía de despacho electrónica, salvo ciertas excepciones puntuales.</p>	<p>La indicación es positiva, toda vez que, tal como explicó el Ejecutivo, el Servicio de Impuestos Internos queda informado en el acto de la emisión de la guía de despacho, evitándose así la dilación unilateral de la factura, y acortándose el plazo final entre la entrega del bien o servicio y su pago.</p>
<p>Se aumenta el plazo en que entrará en vigencia y aplicación la nueva ley a los Servicios de Salud, CENABAST y municipalidades, desde 2 a 3 años, para las facturas emitidas por empresas de menor tamaño, y luego de 12 meses, se establece su aplicación para todas las facturas emitidas, sin distinción de emisor.</p>	<p>Esta excepción temporal aplicable a los Servicios de Salud, CENABAST y municipalidades resulta a nuestro juicio excesiva y no ha sido debidamente justificada.</p>

VI. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY¹⁰

“Artículo 1°.- Modifícase la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, en los siguientes términos:

1.- En el artículo 2°:

a) Añádese, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “En todo caso, el plazo pactado no podrá ser superior a sesenta días corridos.”.

b) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto:

“Las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas serán inoponibles a sus futuros cesionarios.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, el plazo de pago asociado a la venta de alimentos frescos y perecederos no excederá de treinta días contado a partir de la fecha de la entrega de los mismos. Para estos efectos, se entenderán como tales, aquellos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días o que precisan de condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte.”¹¹

10 Texto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional, enviado a la Cámara Revisora, para su revisión.

11 El artículo 2° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 2°.- La obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura deberá ser cumplida en cualquiera de los siguientes momentos:

- 1.- A la recepción de la factura;
- 2.- A un plazo desde la recepción de la mercadería o prestación del servicio, pudiendo establecerse vencimientos parciales y sucesivos;
- 3.- A un día fijo y determinado.

En ausencia de mención expresa en la factura y su copia transferible de alguno de los plazos señalados, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días siguientes a la recepción. En todo caso, el plazo pactado no podrá ser superior a sesenta días corridos

Las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas serán inoponibles a sus futuros cesionarios.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, el plazo de pago asociado a la venta de alimentos frescos y perecederos no excederá de treinta días contado a partir de la fecha de la entrega de los mismos. Para estos efectos, se entenderán como tales, aquellos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días o que precisan de condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte.

2.- Incorporáranse los siguientes artículos 2° bis, 2° ter, 2° quáter y 2° quinquies:

“Artículo 2° bis.- Si no se verificare el pago dentro de los plazos señalados en el artículo anterior, se entenderá, para todos los efectos legales, que el deudor ha incurrido en mora, devengándose desde el primer día de mora o simple retardo y hasta la fecha del pago efectivo, un interés igual al interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de noventa días, por montos superiores al equivalente a 200 unidades de fomento e inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento, que rija durante dicho período, en conformidad a la ley N° 18.010, sobre las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero. En el caso de los órganos del Estado, este interés será pagado con cargo a sus respectivos presupuestos.

Artículo 2° ter.- Siempre que el comprador esté en mora, exista o no acuerdo entre las partes respecto de la aplicación y cálculo de los intereses moratorios establecidos en la presente ley, el comprador deberá pagar una comisión fija por recuperación de pagos, cuyo monto se determinará en función del monto total adeudado por el comprador, de acuerdo a la siguiente tabla:

- a) 1 unidad de fomento, si el monto total adeudado es inferior a 100 unidades de fomento.
- b) 5 unidades de fomento, si el monto total adeudado es superior a 100 unidades de fomento e inferior a 1.000 unidades de fomento.
- c) 10 unidades de fomento, si el monto total adeudado es igual o superior a 1.000 unidades de fomento.

Sin perjuicio de lo anterior y cualquiera sea la naturaleza jurídica del deudor, la empresa afectada podrá demandar la resolución del contrato o el cumplimiento forzado del mismo más la indemnización de los perjuicios que deriven de dicho incumplimiento.

Artículo 2° quáter.- Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos afectos a las normas de la ley N° 19.886, los pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán establecer un plazo de hasta sesenta días corridos en las bases de licitación respectivas, tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos, tratándose de contratación directa, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados. En este caso, deberán informar a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, establecido en el Capítulo IV de la ley N° 19.886. Con todo, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que previamente la respectiva entidad certifique la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por ella.

Artículo 2° quinquies.- Si no se efectuare el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo precedente, se generarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios que, de

acuerdo a la legislación vigente, pudieran corresponder, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 2° bis y 2° ter.

En todo caso, los funcionarios responsables de la falta de pago oportuno a que se refiere el inciso anterior podrán ser sancionados con una multa adicional de hasta un 10% de su remuneración mensual, la que podrá ser duplicada en caso de reincidencia.

Las sanciones administrativas previstas en este artículo serán aplicadas por la autoridad competente, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo, la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan.

Para los efectos del cumplimiento del presente artículo, los organismos públicos mencionados en el artículo 2° quáter deberán publicar en el citado Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, todos los actos relativos a la ejecución de sus contratos. A través de aquel sistema deberán efectuar el envío de sus órdenes de compra, la recepción y aceptación de sus facturas, la información sobre la recepción conforme de los bienes y servicios adquiridos, así como la información y gestión de sus pagos.”.

Artículo 2°.- Reemplázase el literal i) del artículo 4°¹² de la ley N° 20.169, que regula la competencia desleal, por el siguiente:

“i) El establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de los proveedores, el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con éstos o la infracción a los plazos dispuestos en la ley N° 19.983 para el cumplimiento de la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura.”.

12 La letra i) del artículo 4°, que se reemplaza por una nueva.

Artículo 4°.- En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes:

i) El establecimiento de cláusulas contractuales o conductas abusivas en desmedro de los proveedores o el incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos.

Sin perjuicio de lo anterior y cualquiera sea la naturaleza jurídica del deudor, la empresa de menor tamaño afectada podrá demandar el monto de los perjuicios que deriven del incumplimiento, de acuerdo a las normas generales. La acción podrá ser ejercida por el afectado personalmente, en demanda colectiva o representado por la entidad gremial que les agrupe, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el ARTÍCULO NOVENO números dos al cinco de la ley que fija normas especiales para empresas de menor tamaño.

Artículo transitorio.- La presente ley, salvo la excepción contemplada en el inciso siguiente, entrará en vigencia a partir del primer día del cuarto mes de publicada en el Diario Oficial.

Respecto de los Servicios de Salud, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las municipalidades, las normas contenidas en los artículos 2° bis y 2° ter y en el inciso segundo del artículo 2° quinquies, que se incorporan a la ley N° 19.983, se aplicarán el primer día del vigésimo quinto mes de publicada la ley en el Diario Oficial. Con todo, en el tiempo que medie entre la publicación de la presente ley en el Diario Oficial y el plazo a que se refiere este inciso, los organismos que aquí se indican tendrán la obligación de informar a la Dirección de Compras y Contratación Pública, en el plazo y formato que ésta fije al efecto, sobre el nivel de cumplimiento respecto de las obligaciones que establece la presente ley.

El reporte a que se refiere el inciso anterior deberá publicarse en el sitio web institucional de la Dirección de Compras y Contratación Pública y remitirse a la Comisión de Economía del Senado y a la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados.”.

ANEXO

INDICACIONES DEL EJECUTIVO PRESENTADAS AL PROYECTO

AL ARTÍCULO 1°

1. Para reemplazar su numeral 1.- por el siguiente:

“1.- En el artículo 2°:

- a) Agrégase al comienzo del inciso segundo, la siguiente oración inicial:

“En todo caso, el plazo pactado no podrá ser superior a sesenta días corridos contado desde la recepción de la factura.”.

- b) Agréganse los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“Con todo, las partes podrán establecer de común acuerdo un plazo que exceda los sesenta días referidos en el inciso anterior. Dicho acuerdo deberá constar por escrito y ser suscrito por quienes concurren a él.

No producirá efecto alguno en este contrato las cláusulas o estipulaciones que:

1. Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato, sin requerir del consentimiento previo y expreso de la otra parte, sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen;
2. Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad que puedan privar a cualquiera de las partes de su derecho de resarcimiento frente a incumplimientos contractuales;
3. Establezcan intereses por no pago, inferiores a los que se establecen en el artículo siguiente;
4. Las demás que establezcan las leyes.”.

2. Para modificar su numeral 2.-, en el siguiente sentido:

- a) Elimínase el artículo 2° ter, cambiando los siguientes su numeración correlativa.

- b) Reemplázase el artículo 2°quáter, que pasa a ser 2°ter, por el siguiente:

“Artículo 2° ter.- Respecto de los contratos de suministro y prestación de servicios que se celebren por los organismos públicos afectos a las normas de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, los pagos a sus proveedores deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, salvo en el caso de las excepciones legales que establezcan un plazo distinto. Sin perjuicio de lo anterior, dichas entidades podrán

establecer un plazo de hasta sesenta días corridos en las bases de licitación respectivas, tratándose de licitaciones públicas o privadas, o en los contratos, tratándose de tratos directos, circunstancia que deberá sustentarse en motivos fundados. Estos motivos deberán señalarse en las respectivas bases de licitación o contratos. En este caso, deberán informar la fecha de pago a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, establecido en el Capítulo IV de la ley N° 19.886. Con todo, para proceder a los mencionados pagos, se requerirá que previamente la respectiva Entidad certifique la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por aquella.

Para los efectos del cumplimiento del presente artículo, los organismos públicos mencionados en el inciso anterior deberán publicar en el citado Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, todos los actos relativos a la ejecución de sus contratos. A través de aquel sistema deberán efectuar el envío de sus órdenes de compra, la recepción y aceptación de sus facturas, la información sobre la recepción conforme de los bienes y servicios adquiridos, así como la información y gestión de sus pagos. La Dirección de Compras y Contratación Pública asesorará a los organismos públicos en la gestión de sus procesos de pago para el cumplimiento de los plazos que establece esta ley e informará a la unidad de auditoría interna de cada servicio y ministerio o aquella que cumpla tales funciones.”.

- c) Reemplázase el artículo 2° quinquies, que ha pasado a ser 2° quater, por el siguiente:

“Artículo 2° quater.- Los organismos públicos señalados en el artículo anterior, deberán dictar una resolución que determine los procedimientos internos que permitan dar cumplimiento a los plazos señalados en el referido artículo. Asimismo, deberán determinar el o los funcionarios que serán responsables de la gestión de los pagos, a quienes les corresponderá velar porque éstos se efectúen conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y en dicha resolución.

Si no se efectuare el pago dentro de los plazos dispuestos en las respectivas bases de licitación o en el contrato, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo precedente, se generarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios que, de acuerdo a la legislación vigente, pudieran corresponder, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2° bis.

En todo caso, los funcionarios responsables de la falta de pago oportuno a que se refiere el inciso anterior podrán ser sancionados con una multa adicional de hasta un 10% de su remuneración mensual, la que podrá ser duplicada en caso de reincidencia.

El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior será verificado por la unidad de auditoría interna de cada servicio y ministerio o por aquella que cumpla tales funciones, complementada con información que genera la Dirección de Compras y Contratación Pública. Para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos deberá informar semanalmente a la Dirección de Compras y Contratación Pública el número, monto e identificación del emisor de cada una de las facturas y notas de crédito recibidas por los respectivos Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, y sus

redes asistenciales correspondientes, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las municipalidades.

Las sanciones administrativas previstas en este artículo serán aplicadas por la autoridad competente, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo, la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan.”.

3. Para incorporar el siguiente numeral 3.-, nuevo:

“3.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 3°:

“Asimismo, serán inoponibles a los cesionarios las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas.”.

AL ARTÍCULO 2°

4. Para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 2°.- Modifícase el artículo 54 del Decreto Ley N°825, de 1974, que establece la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, de la siguiente manera:

- a) Intercálase en el inciso primero, a continuación de la expresión "compra" y antes de la coma (,) la frase “guías de despacho,”.
- b) Elimínase, a continuación del primer punto seguido, la frase “Las guías de despacho y”.
- c) Agrégase, a continuación de la frase “en papel” y antes del segundo punto seguido la siguiente oración:

“Los contribuyentes que solo emitan documentos en papel podrán emitir guías de despacho que no importen ventas por este mismo medio.”

AL ARTÍCULO TRANSITORIO

5. Para reemplazarlo por el siguiente artículo primero transitorio:

“Artículo primero transitorio.- La presente ley, salvo las excepciones contempladas en los artículos siguientes, entrará en vigencia a partir del primer día del cuarto mes de publicada en el Diario Oficial.”

6. Para incorporar el siguiente artículo segundo transitorio, nuevo:

“Artículo segundo transitorio.- Respecto de los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, y sus redes asistenciales correspondientes; la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud; y, las municipalidades, las normas contenidas en los artículos 2°bis y el inciso tercero del artículo 2°quáter que se incorporan a la ley N° 19.983, se aplicarán a las facturas emitidas por empresas de menor tamaño, de conformidad a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N°20.416, recibidas a contar del primer día del trigésimo séptimo mes de publicada la ley en el Diario Oficial. Luego de transcurridos doce meses desde dicha fecha, las normas referidas se aplicarán a las facturas emitidas, sin distinción de emisor.

En el tiempo que medie entre la publicación de la presente ley en el Diario Oficial y los plazos especiales que establece este artículo, los organismos que aquí se indican tendrán la obligación de informar a la Dirección de Compras y Contratación Pública, en el plazo y forma que esta fije al efecto, sobre el nivel de cumplimiento respecto de las obligaciones que establece la presente ley.

El reporte a que se refiere el inciso anterior deberá publicarse en el sitio web institucional de la Dirección de Compras y Contratación Pública y remitirse a las Comisiones de Economía y de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente.”.

7. Para incorporar los siguientes artículos tercero y cuarto transitorios, nuevos:

“Artículo tercero transitorio.- Las modificaciones introducidas al artículo 54 del Decreto Ley N°825 de 1974 sobre la obligación de emitir guías de despacho electrónicas, entrarán en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial.

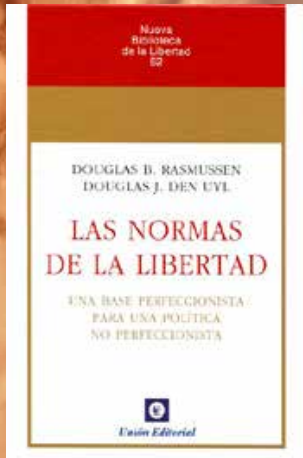
Artículo cuarto transitorio. - El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará, en lo que les corresponda, con cargo a los presupuestos vigentes de las Partidas incluidas en el articulado. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dichos presupuestos en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.”.



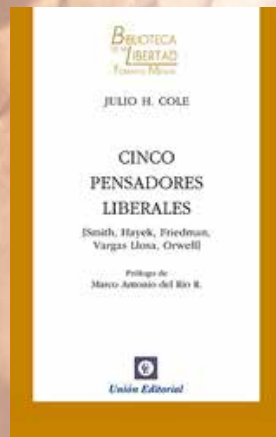
Unión Editorial

LyD representante exclusivo de
Unión Editorial en Chile

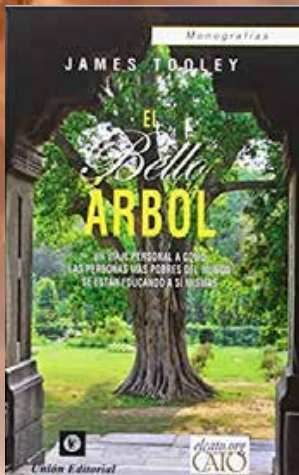
**Más de 300
títulos
disponibles**



Las Normas de la Libertad,
de Douglas B. Rasmussen y
Douglas J. Den Uyl



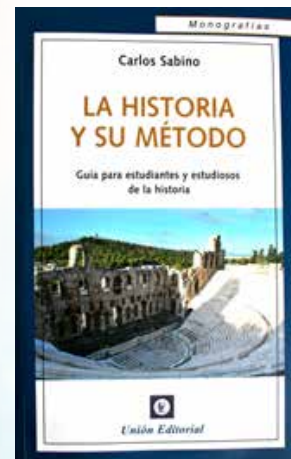
Cinco pensadores liberales
(Smith, Hayek, Friedman,
Vargas Llosa, Orwell),
de Julio H. Cole



El bello árbol,
de James Tooley



**La Economía explicada
a mis hijos,**
de Martín Krause



La historia y su método,
de Carlos Sabino

